

LOS PROGRAMAS INTERNACIONALES DE *PLANEACIÓN* Y LA MILITARIZACIÓN EN MÉXICO

Blanca Rebeca Ramírez Velázquez
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

Los programas internacionales de planeación y la militarización en México

En los últimos años, la violencia en México se ha incrementado, adoptando formas diferenciales que van desde robos, violaciones y asesinatos hasta conflictos territoriales entre los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado. Para erradicarlas, el gobierno, en sus diferentes escalas, ha recurrido a un incremento de la militarización del país en forma diversa. A partir de la transición *democrática* del 2000, se han creado planes y programas, nacionales e internacionales, que han incidido directamente en el incremento de la militarización y de los conflictos relacionados con grupos ajenos a la guerrilla y a la milicia. Concretamente, a partir de 2006, la presidencia de la república inició una guerra abierta contra el narcotráfico y el crimen organizado, fomentada y apoyada por el gobierno estadounidense y su política antidrogas. El principal aporte de este trabajo es dar a conocer ampliamente las conexiones que existen entre los procesos de planeación manejados a nivel internacional con las políticas que se siguen en México con el fin de imponer el control de la población, justificado en una guerra antinarcóticos.

Palabras clave: Militarización, control de la población, planes y agencias internacionales, migración.

Planning, international programs and militarization in Mexico

In the past years, violence in Mexico has risen dramatically; it has developed in different forms such as robberies and rapes; murders and territorial conflicts between drug cartels as well as organized crime and other forms that still need to be identified. In order to eradicate them, the government has resorted to an increase in different types of militarization across the regions. With the *democratic* transition of the country in the year 2000, national and international plans and programs have been implemented and, in our opinion, are directly responsible for the increase in militarization and the rise of conflicts related to groups other than the guerrilla and militia. In particular, since 2006, the policy implemented by the Mexican Presidency began an open war against drug trafficking, and organized crime assisted by the US government and their drug policy. Our aim in this paper is to make widely known the connections existing between

the international planning processes with the national policies in order to implement better conditions to control the population. All this justified in a counter-narcotic war that has permeated most social networks as well as urban and rural areas of Mexico. As a result, the fragmentation of the territory is now one of the main features of the Mexican reality.

Key words: Militarization, population control, international plans and programmes, migration.

En los últimos años, la violencia en México¹ se ha incrementado adoptando formas diferenciales que van desde robos, violaciones, asesinatos hasta conflictos territoriales entre los cárteles del narcotráfico y el crimen organizado, entre otras que es preciso todavía reconocer. Para erradicarlas, el gobierno, en sus diferentes escalas, ha recurrido a un incremento de la militarización del país en forma diversa. En la década de 1970, la militarización se adscribía fundamentalmente al ejército, se podría caracterizar como regional, focalizada en las zonas montañosas, cuyo objetivo era controlar la guerrilla de indígenas y campesinos en el sureste del país, principalmente en las sierras de Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Así se mantiene en la década de 1990, intentando controlar al movimiento zapatista, a quien en realidad no se pudo contener. Sin embargo, con la transición democrática del país, iniciada en 2000, las formas de militarización cambiaron: aparecieron otros agentes además de los indígenas, como los maestros, a quienes era preciso controlar; éstas fueron impulsadas por agencias militares nacionales y extranjeras. Teniendo en mente este panorama tan complejo sobre las diferentes formas y escalas que adopta la militarización en este país, el objetivo que perseguimos es analizar y evaluar la manera cómo los programas internacionales y los de planeación nacional han incidido en el fomento de la militarización, los cuales se han presentado como la única alternativa para oponerse al narcotráfico, a la migración ilegal de centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos y a la violencia en la escala nacional.

Para llegar a la periodización y la identificación de las formas de control y militarización en el país se ha realizado una revisión hemerográfica y bibliográfica exhaustivas, así como extraído algunos datos empíricos que prueben los supuestos que manejamos sobre el impacto de los planes y programas en el territorio. También se han revisado los planes nacionales y los documentos internacionales que tienden a fomentar los soportes específicos que favorecen el control de la población. El principal aporte de este trabajo es dar a conocer ampliamente las finas conexiones que existen entre los procesos de planeación manejados a nivel internacional con las políticas que se siguen al interior del país con el fin de lograr el control de la población

Desde esta perspectiva, en este trabajo se analizan tres instrumentos de planeación internacionales que han fomentado, de diferentes maneras, la militarización en México entre 1994 y 2012. Se concluye con un reflexión sobre las estrategias seguidas por la población para oponerse rompimiento de las redes de producción y sociales que hay en el país como alternativa a la falta de control de Estado de lo movimientos hasta ahora generados.

¹ Este trabajo se hizo con la colaboración de la LPT Jazmín Dafne Somellera Carrasco, Ayudante de Investigación del Departamento de Teoría y Análisis de la UAM-Xochimilco a quien se le agradece su apoyo.

Si el periodo entre 1978 y 1980 a nivel mundial ha sido caracterizado por algunos autores como “un punto de inflexión revolucionario en la historia social y económica del mundo”², no es de extrañar que en América Latina y particularmente en México, este periodo se haya visto acometido por una lucha abierta en contra de los movimientos socialistas y revolucionarios que se dieron en la zona empezando con la Revolución Cubana seguidos en el continente por otros en América Central y del Sur hasta ser arrasadas por el Plan Cóndor³ que se organizó contra la guerrilla y los movimientos indígenas del continente.

Se pudo observar que hay una diferencia entre la forma de militarización realizada en México hasta el levantamiento zapatista y la que se llevó a cabo a partir de 1994. En este movimiento, se planteaba abiertamente una oposición clara a la política del presidente Salinas, quien habiendo firmado con Estados Unidos y Canadá el Tratado Trilateral de Libre Comercio de América del Norte al inicio de 1990, puso en marcha el modelo de desarrollo neoliberal en el país, y propuso también orientaciones novedosas al uso de la milicia. Posteriormente, el presidente Ernesto Zedillo dio pie, al final de su periodo, a la así llamada transición *democrática* del país al terminar con 70 años de gobiernos del partido revolucionario institucional (PRI), heredados de la Revolución de 1910. Ésta se caracterizó por dos periodos sexenales, en los que gobernó el partido conservador, es decir el partido acción nacional (PAN) con Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) y en donde percibimos que la militarización del país ha tenido una mayor incidencia.

Formas y momentos de la militarización neoliberal en el país

La evidencia más clara que se tiene del proceso de militarización de 2000 a la fecha es la incursión directa de organismos, planes o iniciativas internacionales, fundamentalmente estadounidenses, en el control de los movimientos sociales, justificados a partir del ascenso del narcotráfico en el país y la lucha abierta que el gobierno, particularmente el de Calderón, entabló contra el crimen organizado. Se reconocen tres momentos y formas diferentes de establecer estos proyectos: el *Plan Puebla Panamá* implementado con el gobierno de Vicente Fox desde su llegada al gobierno en 2000; la iniciativa *Gunrunner*, que se transforma posteriormente en el operativo *Rápido y Furioso*, que se puso en marcha también a finales de su gobierno y se desarrolló a mayor escala Calderón, a partir de 2006; y la iniciativa *Mérida* que se lleva a cabo en 2011, en pleno gobierno calderonista, y que tiene amplias posibilidades de continuarse en la actualidad con Peña Nieto, a pesar de que el gobierno mexicano nuevamente es gobernado por el PRI a partir de 2012.

El Plan Puebla Panamá

El Plan Puebla Panamá presenta dos dimensiones territoriales complementarias. La primera, es un proyecto nacional, que se instituyó como un plan de desarrollo líder en la gestión de Vicente Fox desde 2000; se caracterizó por presentarse como base para un diálogo de desarrollo regional del sur y sureste del país que tendería como corolario lazos de cooperación con Centroamérica⁴. La segunda, sin embargo, en el ámbito

² Harvey, 2007, p. 7.

³ Castellanos, 2007, p. 17

⁴ Atmann, 2007, p. 1.

internacional, fue una iniciativa que tuvo sus antecedentes en 1991, cuando se establece como un instrumento que contendría en la búsqueda de la inestabilidad política de Centroamérica y del sur de México, en el marco de nuevos escenarios de paz de la zona, que requería tanto el capitalismo de la época como la organización geopolítica de Estados Unidos para América Latina.

A manera de síntesis, viene a ser una especie de megaproyecto dirigido a mejorar la infraestructura física y económica de la región mesoamericana para incrementar el empleo en un área donde las condiciones laborales están bastante socavadas, así como a mejorar la inserción internacional de los países envueltos en el proceso⁵. Desde sus inicios, contó con ocho iniciativas para potenciar el desarrollo económico de la región, de los cuales, para efectos del presente trabajo nos interesan dos: la de interconectar con agilidad y seguridad las vías de comunicación terrestres marítimas y aéreas; y la de contar con redes modernas de interconexión energética y de telecomunicaciones⁶. Según Florencio Salazar, coordinador del plan, “la mejora de la infraestructura física y la generación de empleo son los dos ejes fundamentales del proyecto”, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, la CEPAL, el Banco Japonés de Cooperación y el Banco Mundial⁷, organismos que formaban parte del Grupo Técnico Interinstitucional del plan.

La direccionalidad externa que lo originó emanó de fuertes intereses militares que se insertaron desde los centros de mando internacionales, en especial de Estados Unidos⁸. Fue la intencionalidad de un grupo de inversores que vieron favorecidos sus negocios neoliberales que contaría con una zona de 65 millones de habitantes⁹ y una gran cantidad de recursos naturales tropicales estratégicos que no se encuentran en otras latitudes del continente. En palabras de Salazar y Sandoval, es un plan que intentaba hacer un puente entre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) para “no dejar espacio económico en América Latina que no sea susceptible de ser enajenado y explotado”¹⁰. Para ello, se requería controlar los recursos y evitar los levantamientos insurrectos que caracterizaron a la zona desde Panamá hasta México, entre de 1980 y 2000, amén de los controles de narcotraficantes y otros agentes interesados en apropiarse de la región¹¹. Se argumenta que el plan impulsó una política de remilitarización con el fin de oponerse a la resistencia andina para que no se extendiera hacia las zonas pobres de América Latina y Centroamérica¹². Las razones que justificaban la limpieza social se argumentaban de la manera siguiente:

“Es digno de señalar que la amplia región que abarca el PPP entre el estado de Puebla y el territorio panameño existe el banco biogenético más significativo. Cuenta con grandes yacimientos y producción de petróleo en México, El Petén y reservas potenciales en Nicaragua y Costa Rica; maderas abundantes y finas, recursos de agua abundante, la tierra es muy rica y fértil y sirve para la agricultura y ganadería, pero

⁵ Atmann, 2007, p. 9.

⁶ Atmann, 2007, p. 13.

⁷ Camarena y Valdez, 2002, p. 75.

⁸ Salazar, 2003, p. 80.

⁹ Salazar, 2003, p. 5.

¹⁰ Salazar, 2003, p. 5.

¹¹ Salazar, 2003, p. 5.

¹² Salazar, 2003, p. 80.

está habitada por población indígena y campesina”¹³.

Además, la zona que estaba, y está, inmersa en conflictos diversos: desde revolucionarios, paramilitares y de narcotráfico, hasta una fuerte migración internacional, problemas que eran necesarios sofocar para favorecer la “estabilidad política” en la zona. El plan incluyó desde la construcción de carreteras en algunas zonas, hasta la incursión de efectivos militares en Nicaragua que ayudaron a pacificar al país después de la transición posrevolucionaria que tuvo¹⁴. Algunos autores criticaron el proyecto por la excesiva prioridad que daba a los aspectos comerciales y de desarrollo de infraestructura más que a la solución de los problemas sociales y los conflictos internos¹⁵. También sostenían que el plan actuaría como un cerco político-militar a la insurgencia colombiana y a la propuesta de socialismo del siglo XXI de Chávez en Venezuela. Por último, argumentaban que era una herramienta de Estados Unidos para frenar las migraciones centroamericanas a partir del incremento de trabajo en la zona¹⁶.

Durante el periodo 2002-2005, se registraron avances significativos en 33 proyectos regionales, que involucraron recursos de 4,500 millones de dólares¹⁷. Para 2007, se contaba con 99 proyectos de los cuales 6 ya habían sido ejecutados, 15 se encontraban en ejecución y 42 en gestión. Dos fueron los proyectos con mayor beneficio, ascendiendo éste a 6,135.65 millones de dólares ejecutados: Desarrollo Humano, con aproximadamente 51% del monto y energética, con 33%. De los 51 proyectos en ejecución, 76.3% correspondió al área de transporte, a los que ya se había adelantado un monto de 3,332 millones de dólares. De estos datos se observan dos cosas: primero, que el desarrollo humano era de fundamental atención para el plan y se desglosaba en programas para el control de la expansión del SIDA hacia el norte del continente, la vigilancia epidemiológica de algunas enfermedades tropicales, desarrollar algunos programas de educación y cultura, como uno de generación de sistemas de información estadística de migraciones en Mesoamérica entre otros¹⁸.

Segundo, que en telecomunicaciones, la iniciativa propiciaba la generación de una autopista de la información fue de gran importancia en su ejecución; sin embargo, la que nos ocupa con mayor atención por la importancia que tuvo para el control militar de la zona es la de transporte. Esta creó, tal y como su objetivo lo marcaba, una red internacional de carreteras, puertos, aeropuertos y servicios logísticos regionales con el fin de mejorar la conectividad de la zona, argumentando que tendrían un impacto en el “desarrollo social de las poblaciones”¹⁹. Solamente para el corredor Pacífico se invirtió en la construcción, rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura aproximadamente 25% de la inversión. El proyecto conectaba a la Ciudad de Panamá con la de Puebla en México; la ruta del litoral y el Caribe dio conectividad a Cancún en México con Trujillo en Honduras, pasando por Chetumal y Río Dulce²⁰, además de otros proyectos menores de los cuales no se reportan los montos que se cubrieron para

¹³ Salazar, 2003, p. 85.

¹⁴ Salazar, 2003, p. 88.

¹⁵ Atmann, 2007, p. 20.

¹⁶ Atmann, 2007, p. 22.

¹⁷ Atmann, 2007, p. 67.

¹⁸ Atmann: 778, p. 84.

¹⁹ Atmann, 2007, p. 107.

²⁰ Atmann, 2007, p. 108.

realizarlos²¹.

A diferencia de otros países en donde su hubo una militarización física o el uso de instrumentos bélicos directos, en México, se centró en el mejoramiento de las carreteras y en la presencia física del ejército en el sur y sureste del país; pero a nivel internacional, se propició el desplazamiento a la frontera entre México y Guatemala de los kaibiles, guatemaltecos desechados por el ejército de ese país por los Acuerdos de Paz, que aparentemente se emplean como fuerzas paramilitares de los ganaderos y cafetaleros de la zona, y no son vistos por el ejército mexicano en las bases de Amparo y Augatinta. Asimismo, actúan como agentes amedrentadores de los municipios autónomos zapatistas de Tierra y Libertad²².

Cuadro 1
Evolución de la infraestructura Terrestre en el sureste mexicano 1995-2006

TOTALES			
	1995	2000	2006
Brechas	0	154.4	38,441
Terracería	5,649.6	8,639.19	2,392
Revestimiento	44,538.83	47,453.82	52,963
Pavimentación	3,236.53	27,323.36	4,0339

Fuente: Elaboración propia con base en anuarios estadísticos del INEGI y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

El impacto territorial que tuvo esta estrategia en México se documenta en el cuadro 1, que muestra la evolución de la infraestructura terrestre en el sureste mexicano entre 1995-2006. Resalta el aumento de las brechas, pero también la disminución de los caminos de terracería (de tierra sin pavimento). Llama la atención el incremento de los caminos revestidos y la pavimentación que se dio sobre todo entre 1995-2000, coincidente con el periodo más álgido del movimiento zapatista en Chiapas. Si bien se puede argumentar que algunas construcciones de carreteras fueron beneficiosas para las comunidades campesinas e indígenas de la región, también se constata que otras lesionaron los intereses comunitarios y abrieron sus zonas de recursos para la oportunidad de explotación de empresas transnacionales que se beneficiaron de estos proyectos. Además, los militares pudieron acceder con mayor rapidez y facilidad a las zonas indígenas, sin mayor problema ante cualquier contingencia de insurrección o levantamiento en la zona.

El operativo Rápido y Furioso

El operativo Rápido y Furioso lo inician en México en 2005 con el llamado proyecto *Gunrunner*, que consiste en un programa piloto establecido en Laredo, Texas cuyo objetivo era dejar “caminar” armas a México con el fin de atrapar a quienes las reciben en última instancia²³. Se suponía que solamente el crimen organizado, y fundamentalmente los narcotraficantes, tendrían acceso a las armas, y así se podría seguir la pista de los carteles y descubrir los territorios y recorridos que tenían.

²¹ Atmann, 2007, p. 108-111.

²² Atmann, 2007, p. 91.

²³ Univisión, 2012, p. 2.

En 2006, ya en la presidencia de Felipe Calderón, se convirtió en una iniciativa de corte nacional²⁴, que involucró desde sus orígenes a tres agentes fundamentalmente: el primero, el Departamento de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (AFT)²⁵, perteneciente al Departamento de Justicia de Estados Unidos y desde donde supuestamente surgió la iniciativa. El segundo, se organiza en colaboración con el proveedor de armas que tiene la AFT (Federal Firearms Licensees, FFL) que les permitió a varios intermediarios comprar armas con el propósito de enviarlas a México, o de autorizar que las compren en sus comercios; el tercero, es un grupo de agentes, tiene su asiento en México con dos variantes: una es de corte federal, en la que el gobierno dice no estar enterado ni dar permiso abierto para el desarrollo de la operación. Es hasta 2007 cuando se da a conocer la existencia de un *attaché* de la AFT, asentado en la Ciudad de México, coordinado con la Procuraduría General de la República²⁶.

La otra variante, es una instancia de agentes de corte local, que se ubican en la frontera con México, en donde se integra el “Wide Receiver”²⁷, es decir, un grupo de agentes residentes en la frontera que fueron entrenados en Estados Unidos para perseguir a los delincuentes y dirigentes de los cárteles de drogas. Esta última tiene dos ubicaciones en ciudades que van a ser el centro de los conflictos entre los cárteles de la droga: Cd Juárez en Chihuahua, y Laredo en Tamaulipas, de las ciudades más conflictivas e inseguras del país. De acuerdo con los datos proporcionados por la misma AFT, las armas son rastreadas normalmente a partir del vendedor autorizado. Sin embargo, las confiscadas no necesariamente representan la fuente o los métodos por los cuales son adquiridas por ni el uso que les dan los criminales.

Desde 2007, en la Oficina Fiscal de Estados Unidos se manifestaban preocupaciones sobre los métodos utilizados por la ATF en la operación en cuestión: “No me gusta el caso. Creo que es un error permitir que cientos de armas entren en México cuando sabemos que van para personas involucradas en el tráfico de drogas”²⁸. A pesar del cuestionamiento al programa, se pidió permiso para expandirlo. Esto se demuestra claramente con algunos datos: al inicio, la operación *Gunrunner* contaba con 84 agentes especiales y 15 operadores de investigación de la ATF. En 2010, el número de agentes crece a 224 y el de investigadores a 165²⁹, de los cuales al menos 21 son mexicanos³⁰. Ellos operan en medio de una lucha interna entre los cárteles de la droga en México que son perseguidos por los militares. Para octubre de 2008, la ATF, recibe \$ 21.9 millones de dólares para ampliar el *Gunrunner*. Como se puede observar en las tablas 2 y 3, este es el año en que se incautan el mayor número de armas, además de que se encuentra un mayor número en México, correspondiendo a 28.8 % de las 112, 243 que se encontraron y presentaron a la ATF entre 2007 y 2012.

Con la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos, el operativo cambió de nombre al de *Rápido y Furioso*, sin que se tenga conocimiento de la causa y las

²⁴ Univisión, 2012, p. 1,

²⁵ En inglés: Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, perteneciente al Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

²⁶ Univisión, 2012, p. 2.

²⁷ Univisión, 2012, p. 2.

²⁸ Univisión, 2012, p. 6.

²⁹ Univisión, 2012, p. 6.

³⁰ Univisión, 2012, p. 9.

condiciones que originaron esta modificación; sin embargo, se ubicaron a los compradores principales involucrados con el narcotráfico, ya que, entre otras actividades, se instalaron líneas telefónicas secretas y cámaras escondidas en el techo y pared de alguna de la tiendas de venta de armas en ciudades de la frontera que permitieron su identificación y en ocasiones su seguimiento³¹. Como resultado, la ATF obtuvo más de 1100 pistas de investigación, abrió 276 casos de tráfico de armas y se incautaron 440 armas ilegales. Esto permitió la identificación de intermediarios en la compra de armas destinadas a los carteles del narcotráfico en México.

Cuadro 2
Número de armas procedentes de Estados Unidos encontradas en México y Presentadas ante la ATF

Año	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Número de armas	11,883	21,184	14,539	7,207	15,897	13,075

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de <http://www.atf.gov/> consultada el 3 de marzo de 2014.

Cuadro 3
Número de armas encontradas en México y presentadas ante la ATF

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tipo de armas						
Pistolas	7821	12779	7101	2575	8388	7876
Revolver	2418	3557	2120	494	2418	2316
Rifles	4906	11564	9575	5537	9800	6866
Escopetas	2144	4138	2706	723	1352	1124
Otro	118	311	237	235	491	553
TOTAL	17,407	32,349	21,739	9,564	22,449	18,735

Fuente: Elaboración propia con base en los datos de <http://www.atf.gov/> consultada el 3 de marzo de 2014.

En octubre de 2008, se propone una nueva estrategia para combatir el narcotráfico que consiste en la creación de grupos de inteligencia especiales, liderados por un fiscal y compuestos por personal de varias agencias estadounidenses como la ATF, la DEA o el FBI, si bien esta última agencia niega estar vinculada con la búsqueda de narcotraficantes en México³². La estrategia divulgada, según la fuente que se tomó como base, hasta el 7 de enero de 2010, se ejecutaría a través del *Southwest Border Strategy group*³³, formado desde 2006 para la puesta en marcha del *Gunrunner*, por mexicanos entrenados en Georgia, Estados Unidos, que trabajaban para la ATF y que se unieron a los grupos de esta organización para perseguir las armas introducidas. Con ello se podría afirmar que el país, tanto en la Ciudad de México como en diversas partes de la frontera y otros lugares, ha sido infiltrado desde el inicio del programa por personal que trabaja para agencias de Estados Unidos, mediante ciudadanos mexicanos y estadounidenses que radican aquí y forman parte del personal que contribuye en el operativo.

Para finales de 2009, encargados de la ATF se percataron de que muchos de los crímenes violentos del país fueron ejecutados con las armas introducidas por el

³¹ Univisión, 2012, p. 3.

³² Univisión, 2012, p. 8.

³³ Univisión, 2012, p. 4.

programa, que se encontraron en los registros de la Phoenix Field Division de esta organización. Mientras argumentaban que todo estaba bajo control, se restringió la información de las armas que han transitado en el operativo³⁴. Al mismo tiempo, se percatan de que muchas son vendidas y luego no son recuperadas por la APF, a pesar de los rastreos que podrían identificarlas. En ese contexto, se hacen las capturas sangrientas de los sicarios, como la de Beltrán Leyva el 16 de diciembre de 2009 en Cuernavaca, y las matanzas incluso contra civiles como los estudiantes de Villas de Salvácar, en Ciudad Juárez donde murieron 18 personas entre 15 y 18 años y fueron heridos a 10 más, acusándolos de narcotraficantes. Sólo en esta ciudad, murieron 2,650 personas³⁵.

Es hasta abril de 2010, cuando en el Congreso estadounidense se da a conocer la existencia de la operación *Rápido y Furioso*; Darell Issa fue uno de los políticos más críticos de la operación³⁶, sobre todo por el incremento que hubo en México de los asesinatos finales realizados con armas introducidas por la ATF; sin embargo, esta institución negaba tener conocimiento de este hecho³⁷. Con la muerte de Brian Terry, a finales del 2010, se emite uno de los últimos documentos sobre el operativo informando que se han gastado cerca de \$ 1.25 millones para comprar más de 1,900 armas³⁸ número que de acuerdo con las incautadas, (véanse los cuadros 2 y 3), no es ni por mucho el 1% de las que entraron ilegalmente al país, las cuales no fueron rastreadas.

El gobierno mexicano informó que se enteró de la existencia del programa hasta enero de 2011, cuando estaba en su fase final. Se recibe solamente información de 20 sospechosos arrestados en Arizona que conducirán, de acuerdo con datos proporcionados por la misma ATF, a las únicas condenas obtenidas como resultados del programa³⁹. Es debido a éstas que la prensa se entera e informa al país de la existencia del programa, y dos meses después los congresistas Issa y Grasslev divulgan el informe sobre lo sucedido, calificando la operación como “aberrante” y “mal concebida”, a pesar de que hubo quien negó la introducción de las armas al país por este programa pese a todas las evidencias que se documentaron. En México, la noticia impactó sólo a un pequeño grupo de mexicanos enterados; la mayoría de la población desconoce el resto de esta incursión, que puede ser catalogada como una verdadera invasión al país, permitida por el Estado mexicano, ya que no impidió la entrada de las armas y los culpables han quedado impunes, como muchos de los delitos que se han cometido en las últimas décadas.

La iniciativa Mérida

La guerra contra el narcotráfico, iniciada en el periodo 2006-2012, abrió la información sobre los grupos que controlan la producción de estupefacientes, pero sobre todo el tránsito de éstos al vecino país del norte. Con la iniciativa *Rápido y Furioso* estos grupos lograron ampliar su infraestructura en armas y, aprovechando los vacíos de

³⁴ Univisión 2012, p. 5.

³⁵ Univisión, 2012, p. 6.

³⁶ Univisión, 2012: p. 8.

³⁷ Univisión, 2012, p. 19.

³⁸ Univisión, 2012, p. 11.

³⁹ Univisión, 2012, p. 12.

poder que la transición generó⁴⁰ ampliaron las iniciativas de violencia por el control de los mercados y de los accesos de la droga en el país. También incrementaron el tráfico de migrantes, sobre todo los centroamericanos, a quienes secuestraban en su paso a Estados Unidos. Para combatir a los narcotraficantes, el presidente Calderón les declaró la guerra abierta, apoyándose en la *Iniciativa Plan Mérida*, a partir del apoyo que Estados Unidos dio para el control de la circulación de los narcóticos, aportó los recursos para la actualización del armamento que detendría su comercialización y circulación en México, asumiendo que con ello se pararía la entrada al vecino del norte. Si el operativo *Rápido y Furioso* era apoyado por el Departamento de Justicia estadounidense, la *iniciativa Mérida* dependió directamente del ejecutivo a partir de una visita que hace el Presidente George Bush a México, en 2007.

El programa reconoce las responsabilidades compartidas en relación con la lucha contra el narcotráfico a partir del manejo del denominado “nuevo paradigma emergente”. De ahí que, el “Senado apoya con 350 millones en 2009, 100 menos de los programados inicialmente y destinados a inspecciones para interceptar el tráfico de drogas, armas, dinero y personas; transferencia de tecnologías para mejorar los sistemas de comunicación sobre información criminal en México; asesoramiento y entrenamiento técnico para reforzar las instituciones de justicia y para examinar a las nuevas fuerzas policiales; helicópteros y aeronaves de vigilancia para apoyar actividades de intervención y respuesta rápida de las fuerzas mexicanas, entre otras”⁴¹. Con ello se cumplen los cuatro pilares con los que cuenta la iniciativa: 1) la desarticulación de la capacidad de las organizaciones delictivas; 2) el fortalecimiento de las instituciones públicas; 3) el desarrollo de una frontera segura del siglo XXI; 4) el fortalecimiento de la cohesión social⁴².

Para 2008, se aprueba la versión del proyecto y se dan 400 millones de dólares a México⁴³ para implementarlo; se insiste en que los programas contemplen la posibilidad de rastrear a la delincuencia, pero que en todo caso se haga con el debido respeto de los derechos humanos de las personas involucradas, preocupación que está demás por la violencia que ya se había generado en el país y por la que se fomentó a partir del armamentismo de los grupos de sicarios. Como resultado de esta inversión, México recibió 23 camionetas ZBC equipadas con rayos X de retrodispersión, con remolques para inspeccionar vehículos comerciales ligeros y particulares especiales para buscar armas, drogas, explosivos, químicos o dinero de procedencia ilícita; 45 detectores de vapor manuales con escáneres de iones para el Ejército con valor de 1.1 millones de dólares; 10 minivans para retenes y operativos especiales; dos sistemas de inspección de furgones y carga ferroviaria, con valor de 3.5 millones de dólares para detectar armas y drogas; 8 helicópteros Bell 412 para la Secretaría de la Defensa Nacional y 3 Blackhawk UH-60 para la Secretaría de Seguridad Pública. Además de estas armas, el país vecino aportó equipo y financiamiento para la reforma penitenciaria en México. Ahora se cuenta ya con una academia funcional de policía; se apoyó a oficiales policíacos o agentes aduanales para ampliar y mejorar los equipos caninos utilizados en

⁴⁰ Buscaglia, 2013.

⁴¹ Embajada de Estados Unidos, 2012.

⁴² Embajada de Estados Unidos, 2012.

⁴³ Hubo apoyos para otros países centroamericanos también.

el reconocimiento de los narcóticos, armas de fuego y otros elementos bélicos prohibidos en el país⁴⁴.

En los últimos años del sexenio de Calderón, la *iniciativa Mérida* suspendió la canalización de recursos. Es hasta el 20 de marzo de 2014 que se realizó una reunión trilateral entre los presidentes de México, Canadá y Estados Unidos con el fin de reactivar el tratado trilateral de libre comercio que entró en vigor el 1 de enero de 1994, ahí se habla nuevamente del envío de recursos basados en esta iniciativa. Es en vísperas de esta reunión, que el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, sostuvo un encuentro privado con senadores en donde anunciaba el relanzamiento de la *iniciativa Mérida*” incluyendo 20 proyectos específicos”, que serán apoyados con 100 millones de dólares, adicionales a los 2 mil millones que se han invertido en este esquema de cooperación desde el sexenio pasado⁴⁵. A pesar de que no se especificó claramente cuáles serían los proyectos que se lanzarían, sí se dijo que 1.9 millones de dólares se darían para enfrentar la delincuencia organizada transnacional, la trata de personas, la explotación infantil, el lavado de dinero, el tráfico de armas y se apoyarán las medidas para reducir el consumo de estupefacientes⁴⁶.

Si bien esta iniciativa entró en vigor, en la reunión entre presidentes no se incluyó en la agenda ningún acuerdo o proyecto para impulsar una ley migratoria que terminara con la irregularidad de miles de mexicanos que se encuentran en territorio estadounidense. Recordemos que el periodo de Obama, se ha caracterizado por haber realizado el mayor número de deportaciones en la historia, pese a que, en sus campañas electorales se comprometió a resolver el problema migratorio y así obtuvo el voto latino⁴⁷.

Resalta también que dos días después de la reunión trilateral que se tuvo en Toluca, Estado de México, se anunció en los periódicos la captura del Chapo Guzmán, uno de los líderes del narcotráfico más buscados en Estados Unidos, informando que se hizo conjuntamente entre los marines y la policía mexicana, sin que hubiera habido de por medio, “tan siquiera un tiro”....⁴⁸, en una operación totalmente pacífica en donde se encuentra al capo sin escoltas y acompañado de su familia. Posteriormente se aclaró que lo habían capturado miembros del ejército mexicano, exclusivamente.

Las respuestas internas

Internamente, las consecuencias de estas acciones internacionales se hacen cada vez más evidentes y diferenciadas entre los territorios urbanos y los rurales. Las ciudades se han hecho violentas (más unas que otras), ha habido matanzas, secuestros, retenes policiacos o militares móviles e instantáneos que no tienen ni lugar ni hora precisa, generando pánico entre la población. Las carreteras se han militarizado pues el ejército las transita en ambos sentidos, de día y de noche. Con ello, los espacios públicos se han abandonado en algunas ciudades y los patrones culturales de la población han cambiado. De acuerdo con Buscaglia, esto se ha generado por el vacío de poder tan grande que dejó en México un periodo de transición que dejó abiertos espacios de

⁴⁴ Patrón Rivera, 2008.

⁴⁵ Villamil, 2014, p. 24.

⁴⁶ Villamil, 2014, p. 24.

⁴⁷ Villamil, 2014, p. 24.

⁴⁸ The New York Times, 2014.

poder, que ahora son llenados por el crimen organizado y por las empresas que ellos comandan. Al respecto, argumenta este autor que la delincuencia organizada, que en su opinión tiene múltiples escalas de acción: regional, nacional o transnacional, es un fenómeno que tiene tres dimensiones: la primera es operativa armada; la segunda es política que las protegen y se encuentra dentro del Estado, los partidos políticos y la sociedad; y la tercera es la empresarial que le sirve de canal de lavado del dinero⁴⁹.

Para frenar la inseguridad y la violencia se están buscando formas de participación de la sociedad civil para combatir la corrupción que existe entre la policía. La generación de un *mando único* que integre las responsabilidades municipales, estatales y federales de las diferentes policías es una alternativa que tiende a unificar la responsabilidad de protección de la población y de sus lugares; pero también se ponen en marcha programas de riesgo compartido entre los gobiernos municipales y la población para solucionar el problema de inseguridad vigente.

Las zonas rurales son mucho más vulnerables que las ciudades, pues se han organizado la población en Guerrero y Michoacán (al sur del país) formando los llamados *grupos comunitarios de autodefensa*, algunos independientes y otros manejados y pagados por los gobiernos estatales, los que toman en sus manos la autorregulación de la seguridad de los pobladores contra narcotraficantes, zetas y los mismos militares que los han extorsionado por años. Los problemas legales se hacen evidentes cuando el gobierno federal argumenta que estos grupos no tienen la responsabilidad civil de esta defensa, por lo que muchos han sido encarcelados. Sin duda, la indiferencia federal, la impotencia del Estado y más aún la imposibilidad de autoridades locales de contender con la impunidad y el despojo de los pobladores conforman una basta red de causas que están detrás del problema. En el momento actual, este tema es muy candente en México y ha adoptado muchas formas y discusiones sobre su desarrollo en el país y para abril de 2014, hay denuncias públicas que documentan ya la infiltración de algunos grupos comunitarios en Michoacán, estado en donde se encuentra ahora el problema más álgido, por los mismos narcotraficantes de la zona, pertenecientes al grupo reconocido como los templarios.

Conclusiones

Con los programas y planes internacionales de intervención del país quedan evidentes algunos aspectos de los cuales es preciso reflexionar. Por un lado, el número de personas que han muerto en la guerra del narcotráfico desde 2006 a la fecha asciende ya a 70,000, lo que da claridad de la magnitud del problema y la forma no resuelta de para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico en el país. En ese sentido, hay opiniones que argumentan que este problema no se resuelve con controles de tipo nacional, sino con otros de corte más humano y local que sean integrales y que incluyan dimensiones económicas, sociales y de justicia para la población en su conjunto⁵⁰.

Es evidente que si desde la presidencia de la república se tuvo como elemento central la política la guerra contra el narcotráfico no sólo se ha descuidado la lucha contra la crisis económica, el desempleo y subempleo, sino que se ha colaborado para destruir las redes sociales y de producción, contribuyendo a la generación de un proceso de “destrucción

⁴⁹ Buscaglia, 2013, p. 14.

⁵⁰ Buscaglia, 2013, p. 11.

creativa”⁵¹ de formas tradicionales de poderes e instituciones, de soberanía estatal, de divisiones del trabajo, de relaciones sociales y de protección social entre otros vínculos con la tierra y de los hábitos del corazón. Pero por otro lado ha sido evidente que los gobiernos de *la transición democrática*, incluyendo el nuevo gobierno priista que recuperó el poder en 2012, no cuentan con un proyecto nacional de país que pueda contender con las iniciativas neoliberales que intentan posicionar a México dentro de los cánones del neoliberalismo contemporáneo y de control de cualquier alternativa que no coincida con esta forma de ver la transformación y el desarrollo económico en ninguna de sus escalas: local, regional, nacional o incluso, internacional.

La militarización contemporánea ha sido una presión e iniciativa de los Estados Unidos para controlar internamente al consumo de droga, pero también de control de los movimientos que se oponen a sus visiones. Hasta donde se sabe, este plan tiene también otros trasfondos como romper el tejido social interno del país que impida cualquier movilización antiestadounidense o de “izquierda” que amenace su “seguridad”, proceso que se incrementó desde el 11 de septiembre de 2001 con la destrucción de las torres gemelas.

Si bien el argumento antes expuesto es una de las caras ocultas del desarrollo de los planes, cada uno tuvo un impacto diferente en el territorio nacional y regional. El Plan Puebla Panamá sirvió para contar con la infraestructura carretera y la accesibilidad necesaria para movilizar al ejército rápidamente en la zona sur y sureste del país, con el fin de controlar cualquier movilización que se hiciera desde las zonas indígenas o las marginadas y pobres del país. Esto, como se mencionó anteriormente, tiene su lado positivo, pues comunicó a cientos de comunidades que permanecían aisladas en la sierra chiapaneca y en otros lugares del sur del país.

Las consecuencias más importantes, sin embargo, para analizar la militarización las tenemos en los otros dos programas. *El Rápido y Furioso* armó al narcotráfico y a los delincuentes, justificando su posible arresto sin que esto fuera posible y dejó circular libremente armas en el país beneficiando con ello a los productores y a los comerciantes de armas estadounidenses, quienes vieron circular sus haberes por todo el país sin obstáculo y restricción alguna por parte del gobierno federal mexicano, que es el responsable directo de los problemas y la circulación aduanal de introducción de productos. Por el contrario, y una vez que estuvieron ya armados los delincuentes, el ejecutivo estadounidense fomentó la militarización del ejército mexicano y la policía; éstos son educados, armados y preparados con los estándares estadounidenses de control y manejo de la delincuencia organizada, con el fin de buscar una seguridad nacional que dista mucho de ser implantada y cuenta con resquicios abiertos y débiles que son llenados con inseguridad y delincuencia.

Con todo ello, y al incrementarse la migración nacional y la centroamericana, que aparentemente es imposible detener, y ante la falta de una ley de regularización de los migrantes ilegales de Estados Unidos o de un programa migratorio que tienda a organizarla, se aprueba en el senado estadounidense, en 2013, para levantar un muro en la frontera entre México y Estados Unidos que impida el paso de los migrantes ilegales y se propone destinar sumas millonarias para rastrearlos con aviones no tripulados y otros artefactos militares de tecnología sofisticada que se encargarán ahora, desde el

⁵¹ Harvey, 2007, p. 9.

mismo territorio estadounidense, de detectar sus movimientos y trayectorias con la consecuente movilización de policías y militares de ambos países para controlarlos. La militarización se adapta entonces a los territorios y en sus diferentes escalas, tiende a implantar la organización neoliberal imperante en el momento actual.

Bibliografía

ATMANN, Josette. *Dossier: Plan Puebla Panamá*. Cuadernos Integración en América Latina, Costa Rica, FLACSO y Fundación Carolina, 2007, 115 p.

BUSCAGLIA, Edgardo. Vacíos de Poder en México. México, Debate, 2013, 245p.

CAIRO, H, PRECIADO J, ROCHA A. Introducción, en *La construcción de una región. México y la geopolítica del Plan Puebla Panamá*. Madrid, 2007.

CAMARENA LUHRS Margarita y Andrés Valdez Zepeda. *El Plan Puebla-Panamá y las políticas de desarrollo. Un análisis crítico*. *Espiral*, Estudios sobre Estado y Sociedad Vol. IX. No. 25, 2002, pp. 69-105.

CASTELLANOS, Laura. *México Armado 1943-1981*. México, Era, 2007, 283p.

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS. Información histórica Iniciativa Mérida-Entregas principales al 30 de noviembre de 2012, pp. 10. <http://spanish.mexico.usembassy.gov/es/temas-bilaterales/mexico-y-eu-de-un-vistazo/iniciativa-merida.html>. Consultada el 14 de marzo de 2014

HARVEY, David. Breve Historia del Neoliberalismo. Madrid Akal. 2007, 213p.

PATRON Rivera, Mauricio. *Cronología de Iniciativa Mérida*. Word Press, <http://clasefazio.wordpress.com/2008/10/22/cronologia-iniciativa-merida/>

Consultada el 14 de marzo de 2014.

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. *Plan Puebla Panamá*, Documento Base, México, 2001, pp. 70-90.

SALAZAR PÉREZ, Robinson. El vínculo militar del Plan Colombia y el Plan Puebla Panamá, en Eduardo Andrés Sandoval Forero, y Robinson Salazar Pérez, *Lecturas críticas del Plan Puebla Panamá*. Insumisos Latinoamericanos, Libros en Red, , 2003, 233p.

THE NEW YORK TIMES. 22 de febrero, 2014, versión electrónica, telefónica.

Consulta, 22 de febrero, 2014.

Univisión. noticias.univision.com/aqui-y-ahora/article/2012-09-30/cronologia-rapido-y-furioso#axzz211Ja3oJs. Consultada el 18 de noviembre de 2013.

VILLAFUERTE SOLIS, Daniel y Xóchitl Leyva Solano (coords.). *Geoeconomía y geopolítica en el área del Plan Puebla-Panamá*. México, CIESAS. Miguel Ángel Porrúa, Cámara de Diputados LIX Legislatura, 2006, 297pp.

VILLAMIL; Jenaro. “Relanzamiento de la Iniciativa Mérida”, en *Proceso*. México, 2014.

Consultas electrónicas

<http://www.drugpolicy.org/drug-war-statistics>

Consultada el 3 de marzo de 2014